



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Aclaración sobre el destino de las cuentas bancarias abandonadas

El Banco Central de la República Dominicana, en interés de edificar adecuadamente a la opinión pública respecto de recientes informaciones periodísticas, alusivas al uso y destino de los depósitos de ahorrantes de entidades de intermediación financiera en cuentas consideradas inactivas o abandonadas, se permite formular las siguientes aclaraciones.

1. El régimen legal actual sobre el uso y destino de las cuentas inactivas o abandonadas por sus titulares se encuentra establecido en la **Ley Monetaria y Financiera**, No. 183-02, del 21 de noviembre de 2002, y en el **Reglamento de Cuentas Inactivas o Abandonadas en las Entidades de Intermediación Financieras**, aprobado por la Junta Monetaria mediante la Segunda Resolución del 16 de agosto de 2007.
2. La Ley Monetaria y Financiera dispuso que, transcurridos 20 años sin que sus titulares hubiesen hecho uso de los fondos depositados en las entidades de intermediación financiera, tales recursos sean transferidos al Fondo de Contingencia, creado para asistir en el pago de los depositantes, en la forma prevista por la Ley, en caso de quiebra de una entidad de intermediación financiera.
3. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 56. literal c, de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, los saldos en cuenta corriente, de ahorro, a plazo, especiales o de cualquier otra naturaleza, en bancos múltiples, bancos de ahorro y crédito, corporaciones de crédito y asociaciones de ahorros y préstamos, respecto de las cuales sus titulares no hubieren realizado acto alguno de administración o disposición, en forma tal que revele notoria inactividad de la cuenta durante un plazo de diez (10) años, se entenderán abandonados.
4. Del mismo modo, se establece a cargo de las entidades de intermediación financiera antes indicadas el cumplimiento de un requisito de publicidad (luego de los primeros diez años) que permite a los titulares de esos depósitos realizar su retiro, y que luego de agotado este trámite y transcurrido un plazo de seis (6) meses posteriores a la publicación que deben realizar dichas entidades de intermediación financiera, los recursos no reclamados deben ser transferidos por cada entidad al Banco Central de la República Dominicana, a quien corresponde mantenerlos bajo custodia por un período adicional de 10 años, con el propósito de que los titulares de tales fondos, demostrando previamente su calidad, puedan retirarlos.

5. Asimismo, el Artículo 56, literal c) de la Ley Monetaria y Financiera, dispone que los recursos que no hayan sido reclamados, el Banco Central los transferirá al Fondo de Contingencia previsto en el Artículo 64 de la referida ley, el cual manda a que sea administrado por esta entidad, con un balance separado del propio del Banco Central y fue creado para uso exclusivo en el proceso de disolución de una entidad de intermediación financiera por la Superintendencia de Bancos, conforme los criterios que desarrolla la misma ley.
6. **Cabe destacar, que el interés del legislador fue el de proveer de solvencia al Fondo de Contingencia, que no es propiedad de Banco Central, ni su uso forma parte del desarrollo de sus actividades,** y que en adición a los recursos consignados previamente, se nutre de los aportes obligatorios de todas las entidades del sistema monetario y financiero, la Superintendencia de Bancos y del propio Banco Central. En pocas palabras, la finalidad y objetivo del Fondo de Contingencia es coadyuvar en el pago de los ahorrantes y depositantes de la entidad en disolución. Es decir, que dicha disposición tiene un carácter fundamental para el manejo adecuado de los procesos de salida bancaria y prevención de riesgo sistémico.
7. Por su parte, el **Reglamento de Cuentas Inactivas o Abandonadas en las Entidades de Intermediación Financieras**, establece las normas relativas a la administración y manejo de esas cuentas inactivas, los mecanismos de transferencia de sus valores al Banco Central, la transferencia de los mismos al Fondo de Contingencia, así como los requerimientos de información al público y a los entes normativo y supervisor del Sistema Monetario y Financiero.
8. Hasta la promulgación de la Ley Monetaria y Financiera, el 21 de noviembre de 2002, el destino de las cuentas inactivas estaba regulado por la Décima Resolución de la Junta Monetaria de fecha 21 de mayo de 1987, que estableció un encaje especial de un 100 por ciento sobre las cuentas bancarias con inactividad superior a los cinco (5) años, así como un mecanismo que permitía el retiro de dichos fondos, en cualquier momento, por el titular de la cuenta o depósito.
9. En el año 1997 fue promulgada la Ley Orgánica de Educación, No. 66-97, de 10 de abril de 1997, mediante la cual se creó un Fondo Nacional de Fomento a la Educación. De acuerdo con el artículo 203 de esa ley, el *Fondo Nacional de Fomento a la Educación se nutrirá de las fuentes siguientes: a) Las herencias que no hayan sido reclamadas por herederos legítimos en el tiempo estipulado por las leyes sobre la materia, o las que habiendo sido en ese período, resulten vacantes, por carecer de derecho quien reclame, decidido por resolución de la autoridad judicial competente; b) El cinco por ciento (5%) de todos los impuestos sucesorales existentes a la fecha de la presente ley; c) El cinco por ciento (5%) de cualquier bien inmueble que venda el Estado; d) **El veinte por ciento (20%) del monto total de las cuentas inactivas en los bancos y en las asociaciones de ahorros y préstamos cuyos plazos de reclamación hayan perimido de acuerdo a la ley;** e) Todas las incautaciones que realicen las*

autoridades aduanales, fiscales o de policía, por evasión, contrabando u otra causa.

10. *Del mismo modo, el párrafo I del artículo 203 de la Ley Orgánica de Educación establece que “ Todas las exenciones, exoneraciones y deducciones y demás fuentes que lo nutren por disposición de la presente ley, serán requeridas por el Fondo Nacional de Fomento a la Educación, en coordinación con las instancias recaudadoras correspondientes”.*
11. Ahora bien, de las recientes publicaciones periodísticas surge la interrogante sobre la vigencia y aplicación de las normas precedentemente mencionadas, relativas a las cuentas inactivas, y la necesidad, por parte del Banco Central de la República Dominicana, de fijar una posición pública, consistente con el mandato que le confiere la Constitución Dominicana, de regulación del Sistema Monetario y Financiero y la potestad reglamentaria que la Ley Monetaria y Financiera le ha conferido en relación con el tema en discusión.
12. En ese sentido, la Consultoría Jurídica del Banco Central, en una opinión legal que se publica en la página de internet de esta institución (www.bancentral.gov.do), sostiene el criterio fundado de que al entrar en vigencia la Ley Monetaria y Financiera, el 21 de noviembre de 2002, y establecerse un régimen legal alusivo al uso y destino de las cuentas abandonadas existentes en las entidades de intermediación financiera, la disposición contenida en el literal d) del artículo 203 de la Ley Orgánica de Educación, No. 66-97, quedó derogada.
13. Sobre este aspecto, la jurisprudencia, doctrina y legislación comparada han establecido como una regla incuestionable que una norma jurídica puede ser derogada por otra de igual o mayor jerarquía, que haya sido dictada y puesta en vigencia en una fecha posterior. En este sentido, la comparación de las fechas de promulgación de ambas leyes no deja dudas ni incertidumbres en cuanto a que la Ley Monetaria y Financiera fue dictada con posterioridad a la Ley 66-97, produciéndose desde el momento mismo de su promulgación, la derogación del literal d) del artículo 203 de esta última.
14. La derogación de la disposición contenida en el literal d) del artículo 203 de la ley No. 66-97, se constituyó por el hecho de que aunque la Ley No. 183-02 no previó de manera expresa que por voluntad del legislador esa disposición legal quedaba derogada; sin embargo, este tipo de derogación opera desde el momento mismo en que al sistema jurídico se incorpora una nueva norma que regula el mismo aspecto o materia de que trataba la ley anterior. Dicha derogación, se fundamenta, además, en la disposición derogatoria general contenida en el artículo 90 de la Ley Monetaria y Financiera, en cuanto establece que **“Quedan derogadas todas las disposiciones legales o reglamentarias en cuanto se opongan a lo dispuesto en la presente Ley”**.
15. Por lo antes expuesto, el marco legal vigente que aplica sobre el uso y destino de las *cuentas abandonadas* es el que emana de la Ley No. 183-02, cuyas modificaciones están bajo la reserva constitucional de una votación calificada de

las dos terceras partes de la matrícula de cada Cámara Legislativa, previsión existente para el régimen de la moneda y la banca desde el año 1947.

16. Finalmente, debe destacarse que los recursos de **cuentas abandonadas** transferidos al Banco Central, conforme lo previsto por el Reglamento de Cuentas Inactivas y/o Abandonadas, aprobado por la Junta Monetaria mediante la Segunda Resolución del 16 de agosto de 2007, **no son recursos públicos, ni son propiedad del Banco Central, sino valores bajo la custodia de esta entidad. Se trata de recursos privados, que proceden de los depósitos de los ahorrantes, y que, por mandato legal, tendrán, luego de transcurridos 20 años de inactividad, un uso afecto a una finalidad de interés general, cual es la de nutrir un fondo para atender eventuales reclamos de depositantes privados, en el marco de un proceso de quiebra bancaria.**
17. Es por estas razones de naturaleza legal, que el Banco Central de la República Dominicana no puede, sin violentar lo establecido en la Ley Monetaria y Financiera y el Reglamento de Cuentas Inactivas o Abandonadas en las Entidades de Intermediación Financieras, disponer de los recursos de las cuentas abandonadas, usufructuarlos, asignarlos, distribuirlos u otorgarles un destino distinto al establecido en esas disposiciones legales que los rigen.